

CAUSA ESPECIAL núm.: 20971/2023

Instructora: Excmá. Sra. D.^a Ana María Ferrer García

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Dolores De
Haro Lopez-Villalta

TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Penal

Auto núm. /

Excmá. Sra.

D.^a Ana María Ferrer García

En Madrid, a 6 de marzo de 2024.

Ha sido Instructora la Excmá. Sra. D.^a Ana María Ferrer García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Recibida exposición Razonada elevada por el Juzgado de lo Penal
1 de Zamora.

En el Juzgado de lo Penal 1 de Zamora se seguían diligencias de Juicio
Rápido nº 200/23 dimanantes de la Diligencias urgentes 14/23 del Juzgado de
1ª Instancia e Instrucción 1 de Puebla de Sanabria, en el curso de las que, con

fecha 11 de mayo de 2023 se acordó la apertura del juicio oral, formulándose escrito de acusación por el Ministerio Fiscal contra D. José Manuel Baltar Blanco, como autor de un delito del artículo 379.1 CP, solicitando se le impusiera una pena de 6 MESES DE MULTA A RAZÓN DE CUOTA DIARIA DE 10 €, con la responsabilidad personal subsidiaria que en caso de impago establece el artículo 53 del Código Penal y 1 AÑO Y 1 DÍA DE PRIVACIÓN DEL DERECHO A CONDUCIR VEHICULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES, y el abono de las costas.

Con posterioridad, durante la tramitación del procedimiento y según certificación expedida por el Senado, con fecha 28 de julio de 2023, D. José Manuel Baltar Blanco fue designado Senador por el Parlamento de Galicia en la XV Legislatura, habiendo perfeccionado su condición de tal el 17 de agosto de 2023.

Constatada tal condición, y previo informe en tal sentido del Fiscal, el Juzgado de lo Penal de Zamora en el que se encontraban las actuaciones pendientes de celebración del juicio oral, elevó exposición Razonada a esta Sala 2ª del Tribunal Supremo, como competente para la instrucción y enjuiciamiento de la causa.

SEGUNDO.- Recibida la citada Exposición Razonada, previo informe favorable del Ministerio Fiscal, con fecha 15 de noviembre de 2023 la Sala dictó Auto asumiendo la competencia para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento del aforado D. José Manuel Baltar Blanco, ordenando la apertura del procedimiento y designando Instructora conforme al turno establecido.

TERCERO.- Notificada que fue al Sr. Baltar la incoación de la presente pieza de instrucción, el mismo se personó en las actuaciones, designando como letrado para su defensa a D. Juan Ramón Montero Estévez y al Procurador D. Luis Domingo Fernández Espeso para su representación. Convocado el mismo con las previsiones del artículo 118 bis LECRIM para prestar declaración, y tras

un primer señalamiento que hubo de suspenderse por indisposición del letrado defensor designado para su defensa, el día 19 de diciembre de 2023 se llevó a efecto la misma.

CUARTO.- 1. El 19 de diciembre de 2023, por el procurador D. Luis Domingo Fernández Espeso en nombre y representación de D. José Manuel Baltar Blanco, se presentó escrito, telemáticamente ante el Registro General del Tribunal Supremo, por el que invoca diversas cuestiones solicitando el archivo de las actuaciones al entender que las mismas vulneraban el principio *non bis in ídem* al haber sido ya sancionado administrativamente por los mismos hechos y pagada la oportuna sanción, nulidad de las mismas o, subsidiariamente la práctica de diligencias de investigación previas a la tramitación del oportuno suplicatorio.

2. De tal escrito se dio traslado al Fiscal, quien evacuó el trámite correspondiente por escrito de fecha 20 de diciembre del siguiente tenor:

«1º.- Que se opone a la pretensión de archivo de la causa formulada por la defensa del denunciado; reproduciendo las alegaciones que sobre el particular formulamos en los escritos de 30 de octubre (sobre competencia y procedimiento) y 1 de diciembre de 2023 (contestación al recurso de súplica); y la resolución del recurso de Súplica por el Auto de la Sala de 5 de diciembre de 2023, con referencia a la STS 320/2022, de 30 de marzo, sobre la compatibilidad de sanciones administrativa y penal, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del TEDH sobre el art. 50 CDFUE.

2º.- En cuanto a la pretendida nulidad de actuaciones producida por la incoación de Juicio Rápido, nos remitimos a las consideraciones del Auto del Juzgado de Instrucción de Puebla de Sanabria de 10 de mayo de 2023, confirmado por el Auto de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Zamora; y en todo caso, la incoación de Diligencias Previas no deberá conllevar retroacción alguna de la causa, conforme disponen los arts. 760 y 798.2.20 de la LECrim.

3º.- En cuanto a las diligencias solicitadas, reiteramos nuestro escrito de 30 de octubre (sobre competencia y procedimiento); entendiendo que las

diligencias practicadas en el Juicio Rápido del Juzgado de Zamora son suficientes para formular acusación; habiéndose presentado escrito de acusación por el Ministerio Fiscal, y ejercido el debido control judicial del fundamento de la acusación en esas diligencias, acordando la apertura del juicio oral. En todo caso, el Fiscal no se opone a que se libren los oficios a la DG de la Guardia Civil con los fines que indican los puntos 1, 2 y 3 del escrito de la defensa de 18 de diciembre; oponiéndonos a la práctica anticipada de la prueba testifical, que deberá producirse en el acto del juicio oral.

4º.- Reiterando el punto 5º de nuestro escrito de 30 de octubre, existiendo indicios racionales de criminalidad contra el denunciado Sr. Baltar Blanco, interesa que la Sra. Instructora eleve Exposición a la Sala a los efectos de la solicitud de Supplicatorio, conforme a los arts. 71.2 de la Constitución; 750 y 755 LECrim; y 5 de la Ley de 9 de febrero de 1912; autorización que también es necesaria "en los procedimientos que estuvieren instruyéndose contra personas que, hallándose procesadas o inculpadas, accedan al cargo de Senador", a tenor del art. 22.1 párrafo 20 del Reglamento del Senado, como aquí acontece.

Solo al Tribunal Supremo corresponde la facultad de pedir autorización al Congreso y al Senado para proceder penalmente contra un Diputado o Senador, dice el art. 5 de la Ley de 9 de febrero de 1.912 (AATS de 26 de julio de 2010 [20418/2010]; 14 de febrero de 2011 [20579/2010]; 15 de enero de 2013 [20794/2012] y 1 de diciembre de 2014 [20002/2012]); con carácter previo a su inculpación, procesamiento, o adopción de cualquier medida cautelar (ATS de 23 de junio de 2009 [Aranzadi 300129]); debiendo entenderse por inculpación en el Procedimiento Abreviado el Auto de transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado "equivalente al procesamiento" (ATS de 15 de febrero de 2006 (Rec. 108/2005)).

3. Con fecha 31 de enero de 2024 la Instructora dictó auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal «No ha lugar a acordar la nulidad ni el archivo del procedimiento que han sido solicitados por la representación procesal de José Manuel Baltar Blanco. No ha lugar a la testifical solicitada.

Líbrense oficios a la Dirección General de la Guardia Civil en los términos señalados en el fundamento tercero de esta resolución.

En cuanto a la petición formulada por el Fiscal de solicitud del correspondiente suplicatorio, queden las actuaciones sobre la mesa para resolver.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma caben recursos de reforma en el plazo de tres días y de apelación en el de cinco, sin que sea preceptiva la previa interposición de aquel».

4. Por la representación del Sr. Baltar Blanco se presentó por escrito de fecha 8 de febrero de 2024 recurso de reforma, del que se dio traslado al Fiscal quien solicitó la desestimación del recurso de reforma, confirmando la resolución recurrida.

Con fecha 13 de febrero de 2024 se recibieron los oficios solicitados, dando traslado a las partes.

Con fecha de hoy, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: «DESESTIMAR el recurso de reforma interpuesto por la representación procesal de D. José Manuel Baltar Blanco contra al auto de fecha 31 de enero de 2024.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1.- El artículo 71 de la Constitución dispone en el apartado 2, segundo inciso, en referencia a los Diputados y Senadores, que no podrán ser inculcados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

El artículo 750 de la vigente LECRM, dispone que el Juez o Tribunal que encuentre méritos para procesar a un Senador o Diputado a Cortes por causa de delito, se abstendrá de dirigir el procedimiento contra él (...) hasta obtener la

correspondiente autorización del Cuerpo Colegislador al que pertenezca. Momento procesal que, cuando de procedimiento abreviado se trata, equivale al conocido como auto de transformación, es decir el que se dicta al amparo del artículo 779.4 LECRIM. Y así lo ha entendido de manera constante la jurisprudencia de esta Sala.

El artículo 755 de la misma ley dispone que la autorización se pedirá en forma de suplicatorio, remitiendo con éste, y con carácter reservado, el testimonio de los cargos que resultan contra el Senador o Diputado, con inclusión de los dictámenes del Fiscal y de las peticiones particulares en que se haya solicitado la autorización.

Además, el artículo 5 de la ley de 9 de febrero de 1912, sobre Competencia para conocer de las causas contra Senadores y Diputados, dispone que solo al Tribunal Supremo corresponde la facultad de pedir autorización al Senado o al Congreso para procesar a un Senador o Diputado.

Por su parte, el artículo 22 del Texto refundido del Reglamento del Senado aprobado por la Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, en su reunión del día 3 de mayo de 1994, dispone:

«1. Durante el período de su mandato, los Senadores gozarán de inmunidad y no podrán ser retenidos ni detenidos salvo en caso de flagrante delito. La retención o detención será comunicada inmediatamente a la Presidencia del Senado.

Los Senadores no podrán ser inculcados ni procesados sin la previa autorización del Senado, solicitada a través del correspondiente suplicatorio. Esta autorización será también necesaria en los procedimientos que estuvieren instruyéndose contra personas que, hallándose procesadas o inculpadas, accedan al cargo de Senador...».

SEGUNDO.-1. Los datos que obran en la causa nos permiten afirmar, con el alcance indiciario que el momento exige, que en la tarde del día 23 de abril de 2023, el hoy Senador D. José Manuel Baltar Blanco, conducía el

vehículo Volkswagen Passat, con matrícula por la autovía A-52, sentido Benavente. Al alcanzar sobre las 18,43h. el punto kilométrico 66,900, dentro del término municipal de Asturianos, el aparato de medición allí instalado, Autovelox 106, modelo 946786, con antena 946771, detectó que el mismo circulaba a una velocidad de 215 Km hora. La velocidad máxima permitida en ese punto es de 120 KM/h.

Aplicado sobre el dato obtenido el margen de error del 5% que establece la normativa sobre control metrológico del Estado, el resultado arrojado es de 204 KM/h.

Ese mismo día el Sr. Baltar Blanco fue sancionado administrativamente por circular a 215 KM/hora en un tramo de velocidad limitada a 120 KM.

2. La acotación fáctica realizada encuentra sustento indiciario en los datos incorporados al atestado levantado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, subsector de Zamora, a raíz del resultado arrojado por el medidor de velocidad que el día 23 de abril de 2023 se encontraba apostado a la hora indicada en el KM66,900 de la autovía A-52, así como sus sucesivas ampliaciones. En ellas se recopilan, entre otros extremos, los certificados de verificación expedidos por el Centro Español de Metrología en relación al aparato de medición Autovelox 106. Así mismo se informa que tal aparato operaba anclado a un punto fijo, por lo que, siguiendo el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia del Pleno de esta Sala, STS 184/2018, de 17 de abril, al mismo se le debe aplicar el margen de error del 5%, pues como la misma indicó «Consecuentemente, si el aparato de medición, cinemómetro es empleado desde una ubicación fija, esto es sin movimiento, ya sea fijo o estático, al margen de error es del 5%», resolviendo de esta manera el debate jurídico acerca de si a ese tipo de aparatos que, aun diseñados como móviles, operan anclados sobre un soporte fijo, bien trípode o vehículo parado, es decir, actúan estando estáticos, les era aplicable el margen de corrección previsto para los medidores fijos, el ya citado 5%, o el más elevado de 7% establecido para los que operan como móviles

3. Todos esos datos sustentan indicios racionales y bastantes para atribuir formalmente al Sr. Baltar un delito de los previstos en el artículo 379 .1 CP a tenor el cual «1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años».

Que el Sr. Baltar Blanco hubiera sido sancionado administrativamente por los mismos hechos y como sostiene, abonado la correspondiente sanción pecuniaria, que conllevó además la pérdida de algunos puntos del permiso de conducir, nada objeta a la presente causa penal. Lo hemos razonado extensamente en el auto de fecha 31 de enero pasado. Sin perjuicio de que, en su caso, a la hora de determinar las consecuencias penológicas por parte del órgano de enjuiciamiento, si a ello hubiera lugar, tal circunstancia pueda ser ponderada en aras del principio de proporcionalidad.

4. Del tipo previsto en el artículo 379.1 CP hemos destacado que se trata de un delito de peligro abstracto que incide, incrementándolo, en el que el tráfico rodado conlleva para la seguridad vial. El precepto delimita unas conductas que pivotan sobre elementos objetivos - la conducción a una velocidad sensiblemente superior a la permitida según las características de la vía- en las que el legislador advierte la existencia de un peligro abstracto, hipotético, estadístico, que intensifica por sí mismo y de una forma inadmisibile el riesgo de daños que tal actividad genera en las sociedades modernas, que de esta manera se tratan de evitar (STS 105/2022, de 9 de febrero).

TERCERO.- Acreditada la condición de Senador de D. José Manuel Baltar Blanco, se ha llegado a un momento en que la constancia de indicios cualificados, ya consignados, hace imprescindible para avanzar en el camino procesal, como solicitó el Fiscal en escrito de fecha 20 de diciembre 2023, recabar la autorización prevista en el artículo 71 CE, que se cursará mediante exposición razonada remitida Excmo. Sr. Presidente de esta Sala Segunda para que le confiera el trámite correspondiente.

PARTE DISPOSITIVA

LA INSTRUCTORA ACUERDA: Elevar exposición razonada al Excmo. Sr. Presidente de la Sala de lo Penal para, previo refrendo de la Sala, eleve a la Presidencia del Senado por conducto del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo, suplicatorio para suspensión de la inmunidad del Senador D. José Manuel Baltar Blanco.

Acompáñese a la exposición razonada testimonios de esta resolución, del informe del Ministerio Fiscal reclamando que se solicite autorización para proceder penalmente contra el aforado, del auto dictado por esta instructora el pasado 31 de enero, así como del Auto de la Sala acordando la incoación de la causa, el escrito de acusación y el auto de apertura del juicio oral dictado en el procedimiento de origen.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma caben recursos de reforma en el plazo de tres días y de apelación en el de cinco, sin que sea preceptiva la previa interposición de aquel. Recursos que no suspenderán el curso del procedimiento.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firmo.

Ana María Ferrer García

